

C/ Josefina Martínez Mendoza

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

RUC 2301060119-3

RIT 137 - 2025

_____ /

Santiago, cinco de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Tribunal e intervinientes.*

Que, el día veinticinco de abril de dos mil veinticinco, ante este Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en sala integrada por la jueza María Alejandra Cuadra Galarce, quien presidió la audiencia, por el juez Erick Aravena Ibarra, como integrante, y por el juez Camilo Hidd Vidal, subrogando legalmente, como redactor, se llevó a efecto el juicio oral en causa RIT 137 – 2025, para conocer de la acusación dirigida en contra de **Josefina Martínez Mendoza**, cédula nacional de identidad N° 14.899.095-6, nacida en Bolivia, el 24 de agosto de 1996, de 28 años de edad, soltera, domiciliada para efectos legales en calle Pedro Montt N°1606, de la comuna de Santiago, de ocupación trabajadora de casa particular, actualmente sujeta a la medida cautelar de **prisión preventiva** producto de esta causa.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por la fiscal **María Alejandra Bravo Figueroa**, en tanto la acusada fue representada por la defensora **Irka Contreras Lillo**; todos los intervinientes con domicilio y forma de notificación ya registrados en esta sede.

SEGUNDO: *Acusación.*

Que, los hechos materia de la acusación, según se lee en auto de apertura de juicio oral, fueron los siguientes:

*“El día 01 de octubre de 2023, siendo las 13:30 horas aproximadamente, al interior del Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, la imputada **JOSEFINA MARTINEZ MENDOZA** portaba y poseía con ánimo de traficar al interior de una mochila, 3 paquetes envueltos en cinta de embalaje en cuyo interior mantenían una sustancia en polvo compacta de color blanca, que a la prueba de campo arrojó coloración positiva para clorhidrato de cocaína, con*

un peso bruto de 3,294 kilogramos, todo esto, sin la competente autorización legal y con el ánimo de traficar.”

A juicio del Ministerio Público, el hecho antes descrito configura el delito **consumado** de **tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley 20.000, en que le atribuye participación a la acusada, en calidad de **autor**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Estima la fiscalía que beneficia a la acusada la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°6 del Código Penal.

Por lo anterior, el Ministerio Público requiere se imponga a la acusada **Josefina Martínez Mendoza**, por el delito de **tráfico ilícito de drogas**, la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de noventa unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, comiso de los instrumentos y efectos del delito, más las costas de la causa.

TERCERO: Alegatos de Apertura.

El **Ministerio Público**, en su alegato inicial, señaló que el 1° de octubre de 2023, cerca de mediodía, personal del OS7 de carabineros realizó un procedimiento en el terminal San Borja, con caninos detectores de droga.

En un control aleatorio el perro “Hulk” se acerca a la imputada y señala la mochila negra que llevaba. Conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal se le realiza control de identidad, y se encuentra en poder de la imputada tres paquetes que a prueba de campo arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína, de 79, 85 y 87 gramos de pureza cada uno.

La fiscalía, sin que la imputada haya justificado el transporte, entiende que se enmarcan en el artículo 3° de la ley 20.000 en la hipótesis de transportar, poseer y portar, y conforme artículo 1° de la ley 20.000 señala como sustancia la cocaína.

Se aportará la prueba testimonial, gráfica y pericias, con lo que probará hechos y participación de la acusada.

La **Defensa** indica que durante el desarrollo del juicio se conocerá la historia de Josefina, que es una mujer indígena, quechua, que llega a Chile en el año 2023, con escaso manejo del español, el que aprende a hablar en la escuela de la cárcel, donde se encuentra en estos momentos recluida. Ella es madre soltera, con dos hijos menores de edad, cuyos cuidados dejó encargado a su hermano en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia.

Señala que Josefina, en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus hijos, viaja a Chile buscando trabajo, como temporera o asesora del hogar, ingresando a Chile por el paso Colchane, de manera regular, con

su cédula de identidad boliviana. Luego de ello, desde Iquique se traslada a Calama, buscando trabajo, y es allí donde se encuentra con un connacional, quien le solicita trasladar una mochila a la ciudad de Santiago, para dejarlo en un hostel de la capital.

Explica que Josefina en principio desconoce el contenido de la mochila, no obstante, luego se recrimina por no haber pensado que era droga, al momento de su detención.

Llama al Tribunal a resolver el presente caso conforme a perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, la defensa cultural la plantea como motivo de exclusión o reducción de responsabilidad, debido a la ausencia del elemento subjetivo, a su juicio necesario para la comisión del delito, que puede ser invocada por quien es, en este caso, perteneciente a una minoría o grupo étnico determinado, que ha violado la ley penal en la creencia razonable que actúa de buena fe, siendo dignos de esa manera de su herencia o tradición cultural, como respeto y solidaridad a su grupo étnico, pues dentro de dicha cultura es normal el intercambio y transacción de favores, sin desconfiar de los miembros de su comunidad, donde no es común el transporte de droga, excepto si de hoja de coca, que si se transporta dentro de su cultura, pero para fines religiosos.

Plantea que esta exclusión o reducción de imputabilidad puede ser cognitiva o volitiva, y así la plantea. La primera situación surge cuando el bagaje cultural de la gente, en este caso de su representada, le impide entender que su conducta da lugar a la comisión de un delito, pues ella no se da cuenta que las medidas dictadas por su cultura están en contradicción con las leyes del Estado chileno.

En tanto, la segunda, que también es subsidiaria, se produce cuando ella es consciente de que su conducta está prohibida por la ley dominante al momento que es detenida, pero la realiza de todos modos porque se ve obligada por la fuerza imperativa de los principios propios de su colectividad. Indica que debe buscarse, a su juicio, el rol que juega la culpabilidad como principio general en el derecho penal moderno. Los acusados criminales que actúan de acuerdo a los dictados por su pertenencia cultural, en este caso particular, serían relativamente menos culpables que aquellos que cometieron el mismo acto sin la influencia de cualquier origen cultural particular determinado.

Sostiene que la población femenina indígena migrante se convierte en una de las más vulnerables víctimas respecto de la comprensión de su situación penal, y pueden ser consideradas como víctimas potenciales de violencia psicológica, dada su condición.

Reitera que ella proviene de un pueblo quechua, que es un pueblo indígena que está reconocido por nuestra ley indígena, en este caso la ley 19.253, por lo tanto la petición de la defensa es que se decrete la existencia de un error de prohibición, o, subsidiariamente, una imputabilidad disminuida asociada a la ausencia de voluntad, teniendo presentes los factores interculturales, como la presencia masculina, su etnia, su influencia para acceder a una instrucción, no desconfiando de su contenido.

Y, subsidiariamente, solicita desde ya que el tribunal, en virtud de la declaración que va a prestar, se reconozca la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

CUARTO: Declaración como medio de defensa.

Que, **Josefina Martínez Mendoza**, habiendo sido advertida por la Juez Presidenta de los derechos que en su calidad de acusada detenta, entre ellos el derecho a guardar silencio, decide renunciar al mismo, declarando lo siguiente.

Indica que vino de Bolivia, Cochabamba, trabajando por sus dos hijos, vino a la frontera, pasó con su carnet boliviano a Iquique, de ahí a Calama, ahí buscó trabajo, no encontró. Un caballero boliviano le ofreció un trabajo, llevar una mochila desde un terminal, le dijo “mi sobrino te va a pagar 100 lucas”.

El sujeto le preguntó que estaba haciendo, ella le dijo que estaba buscando trabajo, él le dijo que le tenía un trabajo, llevar una mochila a Santiago, ella le preguntó que era la mochila, él le dijo que era ropa de su sobrino.

Llegó al terminal San Borja, ahí estaba carabineros con un perro, les entregó la mochila y su maleta, ahí se enteró que era droga. No sabía que era droga. Esa mochila que tenía que llevar era a un hostel.

Al interrogatorio de la Defensa.

Llegó a Chile el 27 de septiembre de 2023. En Iquique no se quedó porque no tenía conocidos, vino a buscar trabajo.

La persona que le hizo el encargo era boliviano, no de alguna etnia. Él le dice que traiga la mochila a Santiago. No sabía que tenía droga.

El perro le ladró y revisaron, ahí supo que era droga. Entregó la mochila, no tenía por qué estar ocultando nada.

Tenía que entregar la mochila en el Hostel Alas. No le entregaron dinero, le dijeron que le iban a pagar en el Hostel Alas.

Es Quechua, aprendió a hablar español en el penal.

Al interrogatorio del Ministerio Público.

La persona que le hizo el encargo era boliviano. Hablaba quechua. Con carabineros se comunicó con ellos en español. Habla poco español. En su país se habla quechua, no sabe hablar bien castellano.

Fue hasta 2° básico en su país. Acá aprendió a hablar y escribir.

Exhibe otros medios de prueba. Letra c) N° 1.

Fotografía 1 y fotografía 2. Es su carnet de identidad. En el documento no dice que es de ascendencia Quechua.

Fotografía 4. Es un bus del terminal San Borja. No se acuerda si es el bus en el que ella llegó. Si era de dos pisos.

Fotografía 6. Es la mochila que traía. Cuando la abrieron se enteró que era droga.

Fotografía 10. Lo de color negro es su teléfono. Lo más grande es la mochila. Los paquetes son los que venían en la mochila. El dinero es suyo, venía con esa plata de Bolivia.

QUINTO: Convenciones Probatorias.

Que, conforme consta del motivo cuarto del auto de apertura de juicio oral, los intervinientes no celebraron convenciones probatorias.

SEXTO: Prueba.

Que, el **Ministerio Público** rindió las pruebas cuyo contenido consta íntegramente en el registro de audio, y son las que a continuación se reseñan:

Prueba Testimonial.

CARLOS LUIS CONTRERAS FICA. Sargento 2° Carabineros.

Al interrogatorio del Ministerio Público.

El procedimiento es del 1° de abril de 2023, estaba en el departamento antidrogas, el procedimiento fue en el interior del Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central. Estuvo a cargo del procedimiento, con los funcionarios Felipe Jara, Natalia Gómez, más el canino “Hulk”.

Esto fue a las 13.30 horas, aleatoriamente fiscalizaron un bus de la empresa Pluss Chile, y como andan con el perro detector de drogas, fueron al salón de pasajeros, donde el can detecta a una persona, apuntando a la fuente de olor, una mochila, y conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal se fiscalizó a una ciudadana, ella le pasó su cedula de identidad, era Josefina Martínez Mendoza.

La cabo 1° Natalia Gómez revisa la mochila, y encuentra dos paquetes café, y uno gris, les hace prueba de campo, y arroja coloración positiva a cocaína.

Ella le pasa voluntariamente 40.000 más un celular, y se le leyeron sus derechos. La trasladó a la comisaría para seguir el procedimiento de rigor, confeccionando acta.

La droga que pesó Natalia eran tres paquetes, dos café y uno gris, los tres pesaron 3 kilos 294 gramos de clorhidrato de cocaína. Se confecciona oficio 2514 al servicio de salud, luego otro oficio con el dinero 2515, y las especies incautadas fueron la mochila, con la leyenda Adidas, más una toalla en que estaban envueltos los paquetes, se confeccionó el oficio 25. Se confecciono el parte 560 a la fiscalía centro norte.

Al fiscalizarla se comunica con ella en español, la ciudadana es de nacionalidad boliviana, ellos hablan como bajito, hablan poco, le pidió su carnet de identidad, su identificación. Ella en todo momento le habló en español. Se le entendía poco porque hablaba bajo, pero lo justo y necesario.

Exhibe otros medios de prueba.

Fotografía 1. Cédula de identidad de la detenida.

Fotografía 2. La misma cedula de identidad.

Fotografía 3. El can detector de droga, Hulk.

Fotografía 4. El bus que fiscalizó.

Fotografía 5. La patente del bus.

Fotografía 6. La mochila donde venían los paquetes.

Fotografía 7. El pesaje de cada paquete. 1 kilo 58 gramos.

Fotografía 8. 1 kilo 67 gramos.

Fotografía 9. 1 kilo 169 gramos.

Fotografía 10. El total de lo incautado a la ciudadana Josefina, la mochila, los tres paquetes con clorhidrato de cocaína, dinero, los pasajes, la toalla.

Fotografía 11. Es la imagen de la detenida Josefina Martínez. Viste chaqueta fucsia, jeans azul. Zapatillas.

Fotografía 12. Ahí se está colocando en el andén.

Fotografía 13. Donde se estaciona el bus en el anden

Fotografía 14. Donde está el testigo con el can, fiscalizando a Josefina.

Fotografía 15. Ahí está la funcionaria fiscalizando la mochila.

Ese día vestía uniforme corporativo, la vestimenta oficial.

Al interrogatorio de la Defensa.

Al fiscalizar a Josefina portaba la mochila.

No se opuso a la fiscalización.

Ella habló poquito, lo justo y necesario. Interactuó poco con ella.

NATALIA ELIZABETH GÓMEZ SERRANO. Cabo 1° carabineros.

Al interrogatorio del Ministerio Público.

El procedimiento fue el 1° de octubre de 2023, aproximadamente a las 13.30, en el Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central.

Trabajaron en las patrullas con can detector de drogas, efectuando controles vehiculares y de buses.

Llegó un bus de Pluss Chile, descenden pasajeros del salón, bajó una de las pasajeras, el can efectuó una marcación a la mochila que portaba en sus manos. La testigo procede a revisarla. Le pide la cédula de identidad. Revisó sus vestimentas y equipaje. Encontró en su interior una toalla color amarillo con tres paquetes, dos con cinta de embalaje café, la otra con cinta gris. Efectuaron prueba de camp salió positivo para clorhidrato de cocaína.

Se le leyeron sus derechos, se le dio a conocer el procedimiento. Ella entregó \$40.000 en efectivo y un celular Samsung gris voluntariamente

Se trasladó a la detenida a la 21 comisaria para efectuar el procedimiento.

Se comunicaron con la imputada en español normal, ella hablaba bajo, lento, pero no hubo ningún problema de comunicación con ella.

Ella estaba nerviosa, no hizo ningún problema con dar su identidad, pero no aportó detalles de donde la había conseguido, o donde la llevaba.

Ese día trabajó con los sargentos Contreras Fica, Salas, y el can detector de droga.

Al interrogatorio de la Defensa.

La interacción que estuvo con la fiscalizada fue breve en términos verbales. Ella solo entregó los antecedentes, se le preguntó dónde iba, no quiso entregar más información.

FELIPE ANDRÉS SALAS BURGOS.

Al interrogatorio del Ministerio Público.

Esto ocurrió el 1° de octubre de 2023, estaba en compañía del Sgto. 2° Contreras Fica y de la cabo 1° Gómez Serrano, estaban en Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, efectuando fiscalizaciones a buses.

A las 13.30 llega un bus de Pluss Chile, proveniente de Calama, estaban fiscalizando buses con el apoyo de un can detector de drogas, el Sgto. contreras va a la bajada del salón de pasajeros, empiezan a bajar los pasajeros, el can detecta una mochila, da una señal de alerta, y se le efectuó un control de identidad a la persona, amparado por el artículo 85 del Código Procesal Penal, se detectó que era Josefina Martínez Mendoza, extranjera,

boliviana, Natalia Gómez revisa la mochila, encuentra envueltos en una toalla amarilla dos paquetes envueltos en cinta amarilla y otro paquete envuelto en cinta gris, os tres contenedores de clorhidrato de cocaína.

La fiscalizada habló poco, pero se comunicaba para hacer alguna pregunta, en español.

Al interrogatorio de la Defensa.

No hay preguntas.

Prueba Documental.

Correspondiente a la incorporación, por medio de lectura extractada, por parte de la Fiscalía, de los siguientes documentos, conforme la numeración indicada en el auto de apertura de juicio oral:

- 1. Acta de recepción N° 7179-2023, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la que da cuenta de haberse recibido en dicha repartición las evidencias incautadas bajo NUE 5796780.*

Corresponde al acta de recepción número 7179 del año 2023. En esta se hace presente que con fecha 2 de octubre del año 2023, a las 9:13 h, el servicio metropolitano oriente recibe la NUE 5796780, una bolsa pesa 54,3 gramos, otra 1 kg 63,7 gramos y la última 1 kg 63,8 gramos.

Luego de la muestra que cada una de ellas es de 2 g. Se indica que es cocaína lo acompañado. Este funcionario que entrega es don Juan Lynch Martínez y recepciona don Eduardo Gómez Retamales, quien es de unidad decomiso del Departamento de Salud Metropolitano Oriente.

- 2. Reservado N° 20669-2023, de fecha 15 de febrero de 2024, que contiene protocolo de análisis químico del Instituto de Salud Público de Chile, respecto de la NUE 5796780 concluyendo existencia de Cocaína Clorhidrato, Katherine Alcamán Pantoja. Ello en conjunto con los informes de efectos y peligrosidad de la droga cocaína clorhidrato en la salud pública con firma de la misma perito.*

Contiene en realidad varios, es el reservado número 20669-2023. En él se hace presente que se acompaña a la Fiscalía Regional Centro Norte desde el subdepartamento sustancias ilícitas el 15 de febrero del año 2024. El resultado del protocolo de análisis de drogas y ahí se menciona que respecto a la NUE 5796780, la muestra, 2669-2023-M1-3 es cocaína clorhidrato al 87%, sujeta a la ley 20.000. La muestra M2-3 también es cocaína clorhidrato, al 79%, la muestra M3, la misma sustancia al 85%, las 3 sujetas a la ley 20.000, el documento firmado digitalmente por don Gastón Hernández Hernández, Instituto de Salud pública, Ministerio de Salud.

Se indica cuál es la descripción del test y procedimiento al que ha sometido la muestra. La cromatografía gaseosa y la espectroscopia Román, con el resultado del cual ya ha hecho mención.

Finalmente, el informe de peligrosidad número 20669-2023, sobre el informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de cocaína, clorhidrato, haciéndose mención a las muestras obtenidas y también el porcentaje de pureza, está firmado por doña Caterina Alcamán Pantoja.

3. *Certificado de depósito de dinero.*

El de depósito da cuenta que con fecha 12 de diciembre del año 2023 se depositan \$40.000 pesos, en Banco Estado, recaudación con convenio a nombre de Fiscalía Centro Norte, asociado a la causa RUC 2301060119-3.

Otros medios de prueba.

Consistente en la incorporación, por parte del **Ministerio Público**, a través de la exhibición efectuada a los testigos, conforme fue reseñado, de los siguientes instrumentos:

1. *Set de 15 fotografías.*

SÉPTIMO: Alegatos de Clausura.

El **Ministerio Público** señaló en su alegato de cierre que conforme la prueba rendida se probaron los hechos materia de la imputación. Los funcionarios policiales relataron el procedimiento realizado el día de los hechos. Las fotografías muestran cómo era el sitio del suceso. Se puede reconstruir la dinámica de cuando llega el bus, el can se acerca a la imputada, a su mochila, y junto a ello marca la especie. Al realizar el control de identidad se determina la presencia de estos tres paquetes contenedores de clorhidrato de cocaína de alta pureza.

En cuanto a la hipótesis de la defensa, no nos encontramos ante un error de prohibición. Al consultarse a carabineros, especialmente el cabo que la registra, dice que esta no manifiesta ningún alarde, o expresión de sorpresa, al hallarse estas especies. Trata de contestar lo mínimo, muy nerviosa. Entiende que no existen antecedentes que puedan llevar a conocer que no conocía el contenido, especialmente dado que se le ofreció un pago de \$100.000 para trasladar la mochila.

No existe calificación en su declaración, no da información del hotel, ni las características de la persona, hoy da un domicilio, no se tiene antecedente que permita entender que colaboró en el esclarecimiento de los hechos.

En cuanto a la imputabilidad disminuida, entiende que no concurren antecedentes aplicables a esta situación de excepcionalidad.

En cuanto a la defensa cultural por el origen extranjero de la acusada, lo único que se sabe es que es boliviana, no se probó su origen quechua, habla español, así se comunicó con los funcionarios policial, no se ha probado una etnia distinta que justifique su incumplimiento de la norma.

La **Defensa**, en su alegato de cierre, argumenta que, teniendo presente la prueba que se ha rendido en este juicio, y que no ha sido controvertida por su parte en orden a la forma de comisión de los hechos, lo que controvierte desde el inicio del juicio, y en relación a la propia declaración que ha prestado su representada, es importante a su juicio poner atención a las circunstancias en que se produce esta situación de contexto, previo al control que es realizado por parte de funcionarios policiales, y lo que ha sido acreditado en este caso.

Lo cierto es que su representada efectivamente es de origen quechua, efectivamente aprendió a hablar español al interior de la cárcel, y su situación es de vulnerabilidad, y, por la circunstancia de pertenecer a una matriz de Cultura Andina, en este caso, ella tiene, a su juicio, una en principio, como ya se solicitó, una capacidad disminuida en primer término.

Entiende que efectivamente hay una exclusión de responsabilidad, por error de prohibición. Ella señala que efectivamente no sabía el contenido de la mochila, lo porta, lo trae en razón de obediencia, de acuerdo a lo que su propia cultura ha impartido.

En este tipo de casos y contexto, pero también, subsidiariamente, dada su escasa instrucción escolar, y el origen étnico que ella mantiene, le parece que, subsidiariamente, también se puede dar la existencia de una merma cognitiva o volitiva, en este caso, de la su conducta al momento de la realización o transporte de esta sustancia.

En el evento que entienda el tribunal que efectivamente ella tenía conocimiento, le parece que los datos que ella ha proporcionado durante este juicio son suficientes y contundentes como para considerar que ha colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. Ha renunciado su derecho a guardar silencio, y el día de hoy voluntariamente accedió a prestar declaración.

Por esta razón, ratifica lo ya señalado en cuanto a la perspectiva de género, motivos de interculturalidad y de interseccionalidad, que operan en favor de su representada en el evento, en primer término, de ser absuelta o de ser condenada con las circunstancias minorantes de responsabilidad que ya se han invocado.

El **Ministerio Público**, no hace uso de su derecho a **réplica**.

Al término de la audiencia, **Josefina Martínez Mendoza** hace uso de la palabra, señalando que pide disculpas, que no va a volver a hacer algo así, y que está muy arrepentida.

OCTAVO: Tipo Penal.

Que, en cuanto al delito materia de la acusación, correspondiente al **tráfico ilícito de drogas**, se encuentra previsto y sancionado, en el artículo 3° de la Ley N°20.000, en relación con el artículo 1° del mismo cuerpo legal.

El inciso primero del artículo 1° de la Ley N°20.000 dispone que *“los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”*.

Por su parte, el artículo 3° de la Ley 20.000 indica que: *“Las penas establecidas en el artículo 1° se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.*

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas”.

NOVENO: Decisión.

Que, apreciando la prueba rendida en el juicio con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y al mérito de las pruebas rendidas en la audiencia, el tribunal tuvo por acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

“El día 1° de octubre de 2023, siendo las 13:30 horas aproximadamente, al interior del Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, la imputada Josefina Martínez Mendoza portaba y poseía, al interior de una mochila, tres paquetes envueltos en cinta de embalaje, en cuyo interior mantenían una sustancia en polvo compacta, de color blanca, que a la prueba de campo arrojó coloración positiva para clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 3,294 kilogramos, todo esto, sin la competente autorización legal, y con el ánimo de traficar.”

Los hechos referidos constituyen el delito de **tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley 20.000, en grado de ejecución **consumado**, correspondiéndole a **Josefina Martínez Mendoza**, participación en calidad de **autora**, al haber intervenido en su ejecución de una manera inmediata y directa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

En consecuencia, la sentencia que se dictará en este juicio será **condenatoria** para la acusada antes individualizada, por el ilícito referido.

DECIMO: Análisis de la prueba y razonamiento.

Que, para arribar a la conclusión antes indicada, se ha tenido en consideración las pruebas rendidas por los intervinientes, ya reseñadas en el considerando sexto de la presente sentencia, conforme el razonamiento que a continuación se indica.

Delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

A continuación, procederemos a determinar que hechos pueden tenerse por acreditados en el proceso, en base a un análisis de la prueba rendida durante el juicio, para determinar si concurren o no los elementos constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas, en los términos que formula la acusación fiscal.

a) Respecto de la dinámica de los hechos.

Para arribar a la decisión condenatoria se contó con los dichos del Sargento 2° de Carabineros **Carlos Luis Contreras Fica**, quien indicó, en lo medular, que el día 1° de abril de 2023 desarrolló un procedimiento en el interior del Terminal de Buses San Borja, ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, junto a los funcionarios policiales Felipe Jara, Natalia Gómez, más el canino "Hulk". Señalando que alrededor de las 13.30 horas fiscalizaron un bus de la empresa Pluss Chile, donde el perro apuntó a una fuente de olor, proveniente de la mochila de una persona, la que fue fiscalizada, encontrando en el interior del bolso dos paquetes café y uno gris, que pesaron 3.294 kilos, a los que se les aplicó la prueba de campo, y arrojó coloración positiva a cocaína. Agrega que la persona que portaba el bolso fue identificada como Josefina Martínez Mendoza, de nacionalidad boliviana, conforme la cédula de identidad que les exhibió.

La declaración del funcionario policial fue detallada y espontánea, explicó las circunstancias por las que se encontraba en el sitio del suceso, describiendo los eventos que presenció por sus propios sentidos, no advirtiéndose incongruencias, contradicciones o ambigüedades que fueran sugerentes de un relato ficticio, lo que permite estimar que nos encontramos

ante un relato sólido, y que se vincula en forma armónica con el resto de la prueba incorporada al juicio, como se analizará en los párrafos siguientes, por lo que no se advierte razón alguna que merme la aptitud de este testimonio para generar convicción.

Se relaciona lo expuesto por el testigo con los **otros medios de prueba**, exhibidos en el proceso, consistentes en un set de fotografías del sitio del suceso, la cédula de identidad de la acusada, del bus fiscalizado, del can detector de droga, de la mochila en que venían los paquetes, y del pesaje efectuado a los mismos el día y hora de los hechos.

La prueba recién referida viene en refrendar lo dicho por el testigo, corroborando la existencia de la dinámica fáctica descrita por éste, en cuanto a la fiscalización efectuado y el hallazgo de la especie incautada.

La declaración precitada se vincula con los dichos de la cabo 1° de carabineros **Natalia Elizabeth Gómez Serrano**, quien en lo atingente expuso que participó en un procedimiento el 1° de octubre de 2023, aproximadamente a las 13.30, en el Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, donde trabajaron con un can detector de droga, momento en que llegó un bus de la empresa Pluss Chile, descendieron pasajeros del salón, y el perro efectuó una marcación a la mochila que portaba una pasajera, por lo que la testigo procedió a revisar sus vestimentas y equipaje, encontrando en el interior de la mochila una toalla color amarillo con tres paquetes, dos con cinta de embalaje café, la otra con cinta gris, a los que efectuaron prueba de campo y salió positivo para clorhidrato de cocaína

La declaración de la funcionaria Gómez fue clara, aportando un relato desestructurado, espontáneo y descriptivo, relatando en forma natural los acontecimientos en los que participó, respecto a cómo participó en el procedimiento fiscalizadorio en el terminal de buses San Borja, oportunidad en que el can detector de droga apuntó a una mochila que portaba una pasajera, y tras la revisión de la misma se encontró en su interior tres paquetes que arrojaron positivo para cocaína ante la aplicación de la prueba de campo, descripción que por lo demás concuerda en los aspectos esenciales con la información entregada por el funcionario Contreras Fica sobre la dinámica de los hechos, lo que la corrobora, dando solidez a esta versión de los hechos.

Finalmente se contó con la declaración del carabinero **Felipe Andrés Salas Burgos**, quien respecto a lo relevante del procedimiento señaló que el 1° de octubre de 2023 estaba en compañía del Sgto. 2° Contreras Fica y de la cabo 1° Gómez Serrano, en el Terminal de Buses San Borja, ubicado en

calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, efectuando fiscalizaciones a buses, contexto en el que aproximadamente a las 13.30 llegó un bus de la empresa Pluss Chile, proveniente de Calama, donde el can detector de droga que los apoyaba marcó una mochila, efectuándose un control de identidad a la mujer que la portaba, a quien se le individualizó como Josefina Martínez Mendoza, momento en que la funcionaria Natalia Gómez revisa la mochila, encuentra envueltos en una toalla amarilla dos paquetes envueltos en cinta amarilla, y otro paquete envuelto en cinta gris, los tres contenedores de clorhidrato de cocaína.

La declaración precitada viene en corroborar los dichos de los funcionarios Contreras Fica y Gómez Serrano respecto a la dinámica de los hechos, la detección de la especie sospechosa mediante el apoyo del perro detector de droga, y el hallazgo de los tres paquetes contenedores de una sustancia que arrojó positivo para cocaína dentro de la mochila que portaba la acusada, lo que refrenda los dichos de éstos, y entrega solidez a su versión de los hechos.

Por lo demás, la propia declaración de la acusada **Josefina Martínez Mendoza**, declarando ante estrados, no desconoce que en el terminal San Borja fue abordada por carabineros, que estaban acompañados con un perro, y que les entregó la mochila que portaba, sin perjuicio de afirmar en su declaración que desconocía el contenido del bolso que portaba.

Conforme la prueba rendida previamente analizada, atendido su carácter múltiple, al contar con la declaración de tres funcionarios policiales, que entregan un relato concordante, desde sus perspectivas personales, en que no se aprecian discrepancias relevantes, entregando sus descripciones una única versión de los acontecimientos, no apreciándose tampoco contradicciones o ambigüedades, encontrando por lo demás correlato en otros medios de prueba tales como las fotografías incorporadas al proceso, es que se estima que sus dichos resultan verosímiles y aptos para producir convicción, más allá de toda duda razonable, respecto de que el día 1° de octubre de 2023, siendo las 13:30 horas aproximadamente, al interior del Terminal de Buses San Borja ubicado en calle San Francisco de Borja, 184, comuna de Estación Central, la imputada Josefina Martínez Mendoza portaba y poseía, al interior de una mochila, tres paquetes envueltos en cinta de embalaje, en cuyo interior mantenían una sustancia en polvo compacta, de color blanca, que a la prueba de campo arrojó coloración positiva para clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 3,294 kilogramos, todo esto, sin la competente autorización legal, y con el ánimo de traficar, hechos que se tienen por acreditados.

b) Sobre la concurrencia de los elementos del tipo penal del artículo 3° de la ley N° 20.000.

Conforme lo analizado en la letra a) precedente, en relación a los elementos del tipo penal, se estima que estos concurren en su totalidad, conforme al siguiente desglose:

b.1) Existencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.

Se tuvo por establecido que con fecha 1° de octubre de 2023 se incautaron tres paquetes que portaba la acusada Josefina Martínez Mendoza en una mochila, a los que se le realizó una prueba de campo por la funcionaria Natalia Gómez Serrano, dando positivo para clorhidrato de cocaína.

Este antecedente inicial encontró correlato con lo observado en la prueba documental incorporada al proceso. En efecto, el acta de recepción N°7179-2023 da cuenta de haberse recibido tres paquetes contenedores de 1059,3 gramos, 1068,7 gramos y 1168,8 gramos de una sustancia descrita como polvo blanco, dubitada como cocaína, correspondientes a la NUE 5796780, rotulados respectivamente como M1, M2 y M3. A su vez el protocolo de análisis químico del subdepartamento de sustancias ilícitas indica que tras ser sometidas las muestras a los procedimientos de cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama y espectroscopía raman la muestra M1 dio positivo a cocaína clorhidrato al 87% de pureza, la muestra M2 dio positivo a cocaína clorhidrato al 79% de pureza, y la muestra M3 dio positivo a cocaína clorhidrato al 85% de pureza, lo que fue informado por el Servicio de Salud a la Fiscalía regional centro norte a través del reservado N°20669-2023.

Estos medios de prueba permiten concluir que la sustancia incautada a la acusada Josefina Martínez Mendoza efectivamente corresponde a clorhidrato de cocaína, ya que desde un primer momento la prueba de campo aplicada a los paquetes que portaba en la mochila dieron positivo a tal sustancia, lo que se vio corroborado posteriormente tras la remisión de la sustancia a los organismos pertinentes, donde tras la aplicación de las pruebas científicas de rigor se arribó a la misma conclusión, al determinarse que las muestras de cada paquete correspondían a clorhidrato de cocaína, al 87%, 79% y 85% de pureza, respectivamente, por lo cual se tiene por establecido este elemento del tipo penal, al encontrarse esta sustancia regulada por la ley N°20.000.

b.2) Aptitud de la sustancia para provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Sobre este particular se contó con el Informe de peligrosidad N° 20669-2023, relativo a la cocaína clorhidrato, que señala en lo atinente que: *“...se caracteriza por estimular el sistema nervioso central, incluso hasta la euforia porque aumenta el nivel de catecolaminas cerebrales y el bloqueo en la recaptación de las mismas. Aumenta el riesgo de sufrir trombosis, derrame cerebral y paranoia transitoria en la mayoría de los adictos. El uso continuo mediante la aspiración nasal (esnifar) de la cocaína en este estado puede producir congestión nasal, ulceración de la membrana mucosa, hasta incluso perforación del tabique nasal y del palatino. La COCAÍNA CLORHIDRATO puede producir complicaciones cardiovasculares en las arterias del corazón y del cerebro, lo que puede provocar un infarto del corazón. A medida que el consumo de esta droga se hace crónico, se desarrolla en el adicto una mayor tolerancia a ésta; es decir, a través del tiempo el consumidor necesita cada vez mayores niveles de cocaína en su organismo para lograr un mismo efecto, pudiendo ocurrir una sobredosis con consecuencias fatales...”*

El informe describe las adictivas y perniciosas consecuencias que esta sustancia produce en la salud al ser consumidas por los seres humanos, pudiendo incluso provocar muerte por sobredosis. Este documento fue evacuado por una perito química especialista, quien tiene la experticia y conocimiento suficientes para ilustrar al Tribunal respecto a los efectos que las sustancias incautadas pueden generar en la salud pública, por lo que se tiene por acreditado este elemento del ilícito.

c) Tráfico de las sustancias incautadas.

En este punto es menester señalar que el delito de tráfico ilícito de drogas contempla, en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley N° 20.000 una larga lista de verbos rectores que el legislador estima constitutivos de este ilícito, y de los hechos que se han tenido por probados se aprecia que en este caso en particular se verifican los verbos rectores de **poseer y portar**, los que se verifican desde que Josefina Martínez Mendoza tenía en su poder los tres paquetes contenedores de clorhidrato de cocaína, los que guardaba dentro de una mochila que tenía en sus manos al momento de ser fiscalizada, por lo que se tiene por acreditado este elemento del tipo penal.

d) Ausencia de la autorización respectiva.

Atendido que la prueba documental consistente en el Informe de peligrosidad N° 20669-2023, relativo a la cocaína clorhidrato, señala en lo atinente que: *“...En nuestro país **no existe ninguna persona natural o jurídica autorizada para portar, distribuir, consumir o vender cocaína** y las importaciones son autorizadas por el Instituto de Salud Pública*

de Chile con fines estrictamente analíticos y excepcionalmente con fines científicos, bajo la estricta supervisión médica y el control sanitario correspondiente...”, es que se concluye que la acusada Josefina Martínez Mendoza no contaba con autorización alguna para el posesión y porte de la sustancia ilícita incautada, por lo que se tiene por establecido este elemento del tipo penal.

e) Sobre la tesis de la defensa.

La defensa sostuvo una tesis principal de absolución por error de prohibición, indicando que la acusada ignoraba que lo que portaba en la mochila era droga, instando al tribunal a ponderar los hechos de la causa con perspectiva de género, fundado en que la encartada sería parte de la etnia Quechua, con escasa educación, que solo habría aprendido a hablar español durante la prisión preventiva decretada con motivo de esta causa, y que su actuar se encontró condicionado a las costumbres culturales de su grupo étnico, donde es normal el intercambio y transacción de favores, sin desconfiar de los miembros de su comunidad, donde no es común el transporte de droga. Profundiza su argumento indicando que esta reducción de responsabilidad puede ser cognitiva, por no entender que su conducta constituye delito, o volitiva, cuando entendiendo que la conducta está prohibida por la ley la realiza igualmente porque se ve obligada por la fuerza imperativa de los principios propios de su colectividad. En subsidio, solicita se decrete la imputabilidad disminuida de la acusada, por los mismos argumentos, y, en subsidio, pidió se le conceda la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, por el mérito de su declaración.

Que, atendidas las características de lo alegado, es que la aplicación de la perspectiva de género surge como una herramienta necesaria y eficaz para minimizar los errores en la valoración de la prueba, derivados de ideas preconcebidas o prejuiciosas, teniendo presente el fenómeno de discriminación al que se ven enfrentadas las mujeres, en especial cuando fueran parte de una etnia minoritaria, cuyas diferencias culturales pudieran perjudicarlas frente a la comprensión de la ilicitud de su obrar, u obraran como una imposibilidad de oponerse a la ejecución de ciertos actos que les fueran instruidos; de forma tal que utilizar un enfoque de género al analizar la prueba busca la igualdad material de los intervinientes, al resolver la controversia reparando en las situaciones de desigualdad en la que se encuentran las mujeres frente a los estereotipos y roles que les asigna el orden social, y que impiden un efectivo y pleno ejercicio de sus derechos.

Lo anterior en concordancia a los diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile, en los que, entre otros, se

consagra el derecho a la igualdad –en cuanto prohíbe la distinción basada en el sexo–, consagrado en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de 1993 –en cuanto reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979, que recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y la dignidad humana, consagrando la obligación de los Estados parte de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios, la Recomendación General N°19 de la CEDAW sobre la violencia contra la mujer, en cuyas observaciones generales se señala expresamente que la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos es una forma de discriminación.

Expresado lo anterior, es menester señalar que tal marco conceptual en caso alguno puede erigirse como un sustituto de la obligación de los intervinientes de acreditar los hechos básicos sobre los que se estructuran sus teorías del caso, y habiendo el Ministerio Público acreditado los hechos que configuran de los elementos del tipo penal, resulta carga de la defensa probar los hechos sobre los que descansan sus alegaciones, es decir, que efectivamente Josefina Martínez Mendoza pertenece a la etnia Quechua, y cuáles son las particularidades culturales de la misma.

Y lo cierto es que no existe antecedente alguno en el proceso, más allá de la declaración de la propia acusada Josefina Martínez Mendoza, cuyos dichos evidentemente pretenden operar en su beneficio, que den cuenta de tal circunstancia. En efecto, la acusada afirma ser parte de la etnia Quechua, pero no existe ningún respaldo, ya sea de carácter documental, testimonial, o de cualquier otra naturaleza, que permita tener por establecido, en términos mínimamente razonables, que ella pertenece a la etnia señalada, más cuando siquiera sus apellidos dan cuenta razonablemente de aquello, lo que no es un tema menor, porque esencialmente la defensa pide al tribunal incurrir en un acto de fe, que por la sola afirmación de la encartada de pertenecer a la etnia Quechua, y por al parecer hablar dicha lengua, tal circunstancia tiene que tenerse por probada, lo que pugna con las cargas mínimas que le resultan exigibles para acreditar su propia teoría del caso, aun bajo al aplicación de la perspectiva de género, máxime por cuanto la etnicidad de la acusada es la parte central de sus alegaciones, por lo que era previsible la necesidad de probar tal hecho

base en el juicio, de forma tal que debió ofrecerse prueba al respecto durante la audiencia preparatoria del juicio oral, pero incluso de considerarse que los antecedentes sobre su etnicidad solo se supieron tras la audiencia señalada, no se planteó incidencia alguna en el proceso relativa a la incorporación de prueba nueva que permitiera dilucidar esta circunstancia, por lo que sencillamente no se ha contado con los elementos mínimos necesarios para determinar el hecho central sobre el que se estructura la defensa de la acusada: su pertenencia a la etnia Quechua, por lo que tal circunstancia necesariamente se debe tener por no probada.

Ahora bien, incluso asumiendo hipotéticamente que el tribunal tuviera por acreditada la pertenencia de la acusada a la etnia señalada, existe un segundo problema que impide acoger la tesis de la defensa, por cuanto esta afirma que la acusada habría obrado con falta de voluntad, influenciada por motivos culturales, incapaz de negarse a la petición de un connacional masculino, en razón de la obediencia que su propia cultura le ha impartido, pero lo cierto es que, nuevamente, no se ha aportado antecedente alguno al tribunal respecto de la cultura Quechua, sus costumbres, sus tradiciones, y los roles que usualmente competen en ella a hombres y mujeres, y sin estos elementos básicos no existe forma alguna que el tribunal pueda contrastar, sin caer en especulaciones infundadas basadas solo en presuposiciones, que efectivamente la acusada se haya visto constreñida en su voluntad para transportar la mochila que contenía la droga desde Calama a Santiago, máxime por cuanto la propia acusada señaló que accedió a transportar el bolso por una suma no menor de dinero, cien mil pesos, admitiendo que quien le hizo el encargo no era de la etnia Quechua, sino simplemente otro boliviano, e indicando que le señaló que en el interior de la mochila iba ropa para su sobrino, lo que resulta inverosímil atendido el monto que se le iba a pagar para tal diligencia, lo que es fuertemente indiciario de su conocimiento del contenido de la especie.

En la misma situación se encuentra la defensa subsidiaria formulada por factores cognitivos, por cuanto postula que la acusada, por pertenecer a una matriz de cultura andina tiene, a su juicio, una capacidad disminuida, afirmación que no encuentra correlato en ninguno de los antecedentes incorporados al proceso, y que de adherir el tribunal a tal afirmación sería francamente discriminatorio, por cuanto implicaría sostener que por el solo hecho de pertenecer a una u otra etnia determinada una persona se encontraría en desventaja intelectual respecto al resto, por lo que necesariamente tal alegación debe ir aparejada de antecedentes que demuestren, en el caso particular tal afirmación, y nuevamente se carece de

cualquier antecedente de escolarización, o prueba de habilidades cognitivas que se haya realizado a la acusada; en caso contrario, los tres carabineros que declararon en juicio afirman que no hubo problemas de comunicación con la encartada, quien entendía y hablaba el idioma español, por lo que no puede tenerse por acreditada una merma de facultades como la que plantea la defensa.

Descartados estos elementos, la tesis de error de prohibición no se verifica. En efecto, como ya se indicó previamente, la acusada aceptó trasladar una mochila, que presuntamente contenía ropa, por una altísima suma de dinero, tesis que no resulta sostenible por lo inverosímil que resulta una transacción de tal naturaleza. En tal orden de ideas, se rechazarán las alegaciones de la defensa, de error de prohibición e imputabilidad disminuida, por no existir elementos probatorios mínimos que permitan establecer su concurrencia.

Como corolario, el uso de la perspectiva de género resulta una herramienta fundamental para visibilizar condiciones de interseccionalidad en personas vulnerables, evidenciando aquellos elementos que generan estereotipos de género en la sociedad, emanados de prejuicios enquistados por el desarrollo que experimentan las comunidades a través de su historia, como un reflejo de la cultura que se perpetúa a través de las generaciones, y por tanto permitiendo la supresión de tales sesgos, a través de una perspectiva que permita identificar y comprender las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres, así como las barreras en el ejercicio igualitario de los derechos, lo que en caso alguno implica para el juzgador el subsidio de la evidencia rendida para acreditar los elementos centrales de las teorías del caso de los intervinientes, de forma tal que la perspectiva de género opera en la óptica del análisis de la prueba, pero no como un complemento o suplemento de la misma, de forma tal que su carencia no puede ser subsanada por medio de esta óptica, por cuanto la labor interpretativa y ponderativa no puede ser efectuada sobre elementos que no han sido probados superando el estándar probatorio establecido por la ley.

f) Conclusión.

Del análisis efectuado en los acápite precedentes a la prueba rendida durante el proceso, estos jueces han considerado acreditados la totalidad de los hechos establecidos en el considerando noveno de esta sentencia, los que se subsumen íntegramente en el tipo penal de tráfico de drogas, por lo que la acusada Josefina Martínez Mendoza será condenada en calidad de autora de tal ilícito, en grado consumado, como se indicará en lo resolutivo.

UNDECIMO: Participación y grado de desarrollo.

Que, en este punto analizaremos la participación de los acusados en los hechos que se estimaron acreditados en el proceso, y el grado de desarrollo del ilícito.

a) Respecto al grado de desarrollo de los ilícitos.

En este particular, de acuerdo al razonamiento efectuado en el considerando precedente, y a los hechos que se tuvieron por probados, se concluye que, respecto al delito de **tráfico ilícito de drogas**, habiéndose verificado en su totalidad los verbos rectores de porte y posesión, el ilícito se encuentra en grado **consumado**.

Respecto a la participación de la acusada en los hechos:

Respecto a la participación de la acusada, los carabineros Contreras Fica, Gómez Serrano y Salas Burgos indican que al momento de la fiscalización la detenida entregó su cédula de identidad, en el que apreciaron que se trataba de Josefina Martínez Mendoza, por lo que se tiene por establecida su participación en calidad de autora, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por haber intervenido en la ejecución de los hechos de materia de la acusación de manera inmediata y directa.

En consecuencia, la sentencia que se dictará en este juicio será **condenatoria** para la acusada **Josefina Martínez Mendoza**, en calidad de **autora** del delito **consumado** de **tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley 20.000.

DÉCIMOSEGUNDO: Audiencia de determinación de penas.

Que, invitados los intervinientes a la audiencia prevista en el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal, señalaron lo siguiente.

Ministerio Público.

Reconoce a la acusada la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°6 del Código Penal.

Indica que, habiéndose reconocido por el tribunal la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, pide 5 años de presidio menor en su grado máximo, y solicita tener presente el artículo 34 de la ley 18.216, ya que la acusada está irregular en el país. La norma señala que si el condenado a pena igual o menor a 5 años fuera extranjero irregular, la única pena que se aplica es la expulsión. El mismo artículo 34, parte final indica que no procede la sustitución respecto a delitos de ley N°20.000, por lo que el cumplimiento debe ser efectivo.

Defensa.

Indica que, considerando que concurren dos atenuantes, artículo 11 N°6 y 11 N°9 del Código Penal, en relación a la menor extensión del mal causado, ya que la acusada fue sorprendida sin que la droga llegara a un

tercero para comercializarla, pide se le imponga una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, y para el cumplimiento pide se le conceda la libertad Vigilada Intensiva, ya que si bien el artículo 34 de la ley 18.216 reconoce la expulsión como pena sustitutiva, excluyéndola por la jurisprudencia en cuanto a los irregulares, quedó claro que ingresó en forma regular, con su cédula de identidad, y la norma del artículo 34 no es aplicable conforme al artículo 1°, en relación al 15 bis de la ley 18216. Indica que cuenta con informe pre sentencial realizado por el profesional Danilo Linqueo, perito social, para fundar su petición principal.

Subsidiariamente pide su expulsión, por el artículo 34 de la ley N°18.216, indicando que hay distinción respecto de si el inmigrante ingresa de manera regular o irregular al país, señalando que el inciso final señala que no procederá la sustitución, pero adhiere a la parre de la doctrina que señala que si puede.

Respecto a la multa, pide 1 unidad tributaria mensual, y que se dé por cumplida con la privación de libertad.

A la consulta del tribunal indica que no está regularizada su situación migratoria en el país.

El **Ministerio Público** no hace uso de su derecho a réplica.

DÉCIMOTERCERO: Decisión sobre modificatorias de responsabilidad.

Que, atendido el reconocimiento efectuado por el Ministerio Público, por no constar anotaciones en el registro general de condenas en los extractos de filiación y antecedentes de la acusada **Josefina Martínez Mendoza**, se le concederá la atenuante del artículo 11°6 del Código Penal.

Se le reconocerá a la acusada la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, ya que existió en su declaración un posicionamiento en el sitio del suceso, y un reconocimiento de encontrarse en poder de la mochila en que fue encontrada la droga. Asimismo, su declaración aportó antecedentes tales como que recibió cien mil pesos por llevar la mochila de Calama a Santiago, que se le informó que en su interior iba ropa, y que la persona que le efectuó el encargo era un boliviano no perteneciente a la etnia Quechua, elementos que si bien no constituyen un reconocimiento del hecho por la acusada, si le permitieron al tribunal tener por no concurrentes diversos elementos de la tesis de descargo, como se analizó en el considerando décimo, por lo que se estima que tales dichos constituyen una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

DÉCIMOCUARTO: Consideraciones de las penas.

Que, el delito de **tráfico ilícito de drogas**, tiene asignado en abstracto una pena privativa de libertad correspondiente a presidio mayor en su grado

mínimo a medio, y una multa de 40 a 400 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, dos grados de una divisible, por lo que corresponde dar aplicación al artículo 68 del Código Penal para determinar las penas en concreto.

Atendido a que en favor de la acusada concurren las atenuantes de irreproachable conducta anterior y colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y no le perjudica agravante alguna, corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 68 del Código Penal, por lo que el tribunal impondrá la pena inferior en un grado al mínimo señalado por la ley, fijándose el marco abstracto en presidio menor en su grado máximo.

Para determinar la pena específica a aplicar, dentro del grado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del mismo cuerpo normativo, se tendrá en consideración la presencia de dos atenuantes y ninguna agravante de responsabilidad penal, y considerándose como alta la extensión del mal causado por el delito, atendido la gran cantidad de droga incautada, que supone una mayor afectación al bien jurídico protegido, se aplicará la pena en cinco años de presidio menor en su grado máximo.

En cuanto a la **multa**, por los motivos antedichos, a los que se suma que la acusada se encuentra privada de libertad con motivo de esta causa, es que se presumirá su menor capacidad económica, y en aplicación del artículo 70 del Código Penal se le impondrá la multa bajo el mínimo legal, en una cuantía de **diez unidades tributarias mensuales**.

Conforme lo dispuesto en el artículo 49, inciso 2°, del Código Penal, se **sustituirá la pena de multa por treinta días de reclusión**, y atendido que se ha certificado que la acusada se encontró sujeta a 582 días de privación de libertad por la presente causa, es que se deberá abonar parcialmente a la condena el tiempo antes señalado, teniéndosele la pena de multa por cumplida, y restando un saldo de abono de 552 días.

DÉCIMOQUINTO: Penas sustitutivas.

Que, se desestimaré la petición principal de la defensa, de conceder a la acusada la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, por no estimarse concurrentes los requisitos que exige el N°2 del inciso 2° del artículo 15 de la ley N° 18.216, por cuanto del propio informe social de la acusada, acompañado en la audiencia de determinación de penas, se aprecia la ausencia de arraigo familiar en Chile, por cuanto los dos hijos de Josefina Martínez Mendoza residen en Bolivia, y si bien el informe indica que cuando no se encontraba privada de libertad la encartada se desempeñaba informalmente como trabajadora de casa particular, lo cierto es que esta señaló específicamente al declarar que no encontró trabajo al

ingresar a Chile, y que por eso aceptó el encargo de llevar la mochila de Calama a Santiago, elementos que el tribunal considera para estima que una intervención como la que propicia la Libertad Vigilada Intensiva no resultaría eficaz, existiendo un riesgo de reincidencia por la ausencia de una labor remunerada que pueda desempeñar la acusada, especialmente dada su necesidad de proveer para sus hijos, que no se encuentran en el territorio nacional.

En cuanto a la petición subsidiaria de la defensa, de otorgar la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional, el tribunal accederá a la misma, estimando que se reúnen los elementos que exige el artículo 34 de la Ley N°18.216, parte primera, ya que la pena que se impondrá a la sentenciada es igual a cinco años de privación de libertad, y como señala la propia defensa no reside legalmente en el país, resultando irrelevante para estos efectos si su ingreso al país fue regular o no, porque tal circunstancia no es considerada por la norma en comento.

Ahora bien, se estima que no resulta aplicable en este caso la restricción de la parte final del inciso primero de la disposición en análisis, por cuanto esta se encuentra circunscrita a la hipótesis de los extranjeros que residen legalmente en el país, como se concluye del análisis de lo dispuesto en el artículo 175, N°16, letra a), de la ley N°21.325, que modificó el artículo 34 de la ley N°18.216, agregando la hipótesis de la concesión de la pena sustitutiva a los extranjeros que se encuentren en forma regular en Chile, y también la restricción de no concederla, entre otros, por delitos relativos a la Ley N°20.000, la que no se haría extensiva, en criterio de estos jueces, a la situación regulada en la parte primera del artículo, relativo a los extranjeros que se encuentren en forma irregular en el país, por cuanto su situación se encontraba ya dispuesta en forma previa a la modificación legal en análisis, sin sufrir modificaciones.

DÉCIMOSEXTO: Abonos.

Que, conforme fue certificado por la ministra de fe del Tribunal, la sentenciada **Josefina Martínez Mendoza** se encuentra privada de libertad, con motivo de esta causa, sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, desde el 2 de octubre de 2023 a la fecha de lectura de la presente sentencia, lo que totaliza 582 (quinientos ochenta y dos) días de privación de libertad, los que le servirá como abono a la pena que se determine en la causa.

DÉCIMOSÉPTIMO: Comisos.

En lo tocante al **comiso** solicitado por el Ministerio Público, se hará lugar a lo solicitado, decretando el comiso, con destino legal, de los \$40.000 que fueron incautados a la acusada al momento de su detención.

DÉCIMOCTAVO: Costas.

Que, conforme lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de haberse arribado a una decisión condenatoria, se exime a la acusada del pago de las costas de la causa, por haber estado privada de libertad, sin que pudiese generar algún ingreso económico durante todo el tiempo que mantuvo en dicho estado, siendo beneficiaria de lo dispuesto en el art. 600 del Código Orgánico de Tribunales.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos artículos 1, 11 N°6, 11 N° 9, 14 N°1, 15 N°1, 24, 24 bis, 26, 29, 50, 68, 69 del Código Penal; 1, 45, 47, 85, 295, 296, 297, 325, 326, 328, 333, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; Ley N°20.000, su Reglamento, y Ley N°18.216; **SE DECLARA:**

- I. Que, se **CONDENA** a **JOSEFINA MARTÍNEZ MENDOZA** a cumplir la pena de **CINCO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa de **DIEZ UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, y, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; en su calidad de autora de un delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° de la Ley N° 20.000; cometido el 1° de octubre de 2023, en la comuna de Estación Central.
- II. Que, la pena de multa antes señalada es sustituida por treinta días de reclusión, y se la tiene por cumplida, por compensación con los días que estuvo privada de libertad producto de esta causa, conforme lo razonado en el considerando decimosexto.
- III. Que, al mérito de lo razonado en el considerando decimoquinto, y reuniéndose los requisitos del artículo 34 de la Ley 18.216 modificada por la ley 20.603, se sustituye la pena privativa de libertad impuesta a la sentenciada Josefina Martínez Mendoza, por la de **expulsión del territorio nacional**, con destino a su país de origen, Bolivia, la que se ejecutará en el plazo de 30 días después que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada, debiendo oficiarse, en su oportunidad, a la Policía de Investigaciones de Chile, para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena; y ordenándose la internación de la condenada, hasta el efectivo cumplimiento de la misma, quedando en el intertanto bajo la custodia de Gendarmería de Chile, en el recinto destinado por dicha institución para este

efecto. Oficiase al Servicio Nacional de Migraciones, informando lo precedentemente resuelto.

- IV.** Que, la condenada extranjera que será expulsada, no podrá ingresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de sustitución de la pena, y, en caso de regresar al territorio nacional dentro del plazo señalado, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, caso en el cual le servirá el tiempo que permaneció privada de libertad en esta causa, conforme lo ya expuesto en el considerando decimosexto, correspondiente a 552 (quinientos cincuenta y dos) días de privación de libertad.
- V.** Que, se exime a la sentenciada del pago de las costas de la causa, en conformidad a lo razonado en el considerando decimoctavo de esta sentencia.
- VI.** Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, artículo 45 y 46 de la Ley N°20.000, se decreta el comiso, con destino legal, de las especies incautadas en este procedimiento:
 - 1. \$40.000 incautados a la acusada al momento de la detención, conforme comprobante N°3 de la prueba documental.

Atendido lo dispuesto en los artículos 14 letra f), y 113, inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 468 del Código Procesal Penal, una vez ejecutoriado el fallo, remítanse copias autorizadas del mismo al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda, a fin de que le dé oportuno cumplimiento.

Téngase por notificados a los intervinientes y a la sentenciada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 346 del Código Procesal Penal.

Regístrese y dese copia a las partes vía correo electrónico registrado en el tribunal.

En su oportunidad, archívese.

Redactada por el Juez don Camilo Hidd Vidal.

RUC 2301060119-3

RIT 137 - 2025

Dictada por la Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por la jueza María Alejandra Cuadra Galarce, quien

presidió la audiencia, por el juez Erick Aravena Ibarra, como integrante, y por el juez Camilo Hidd Vidal, subrogando legalmente, como redactor.